

LAS LEYES REPRESIVAS

Una ley de orden público, presentada como arma legal contra unos llamados «delitos nuevos» y popularmente conocida como «anti-casseurs» («casseur»: literalmente, rompedor, destrozador), ha sido modificada de tal forma por el Senado francés con sus enmiendas que, aun aprobada, no servirá para los fines con que la había elaborado el Gobierno, hasta el punto de que el ministro de Justicia ha dicho del proyecto de ley que «está arruinado». Este tropiezo gubernamental es escasamente importante, porque el poder dispone de medios legales y constitucionales para pasar por alto las enmiendas del Senado. Se ha formado ya una comisión paritaria mixta —el Senado y la Asamblea Nacional— que vuelve a examinar el proyecto de ley y le restablezca su integridad; si no fuese así, la Asamblea Nacional podría adoptarlo en segunda lectura sin necesidad esta vez de la ratificación del Senado. Y aun si fallase esta instancia —lo cual no es fácil, porque el partido gubernamental tiene mayoría—, el Gobierno podría acudir a medidas de excepción para implantar la ley sin más consulta a las Cámaras. Esto es, por decreto. Precisamente en esta fuerza casi omnimoda del poder gubernamental está el centro de la cuestión que se discute. Si el Gobierno se ha rodeado de una instrumentación tal que impide que su voluntad sea modificada por los cauces democráticos normales, las oposiciones buscan la manera de participar y de incidir en la dirección del país por vías anormales. En la metrópoli imperial, en Estados Unidos, se ve más claramente el desarrollo de esta forma de dirección: la ampliación de la guerra de Indochina se lleva a cabo en contra del Senado, en contra de la prensa, en contra incluso de miembros del Gabinete y de consejeros de la Casa Blanca, sin que estos estamentos democráticos consigan variar los designios del poder. La oposición, sin cauce regular, busca las acciones irregulares y se encuentra con la represión. Lo que pase en los Estados Unidos puede encontrarse, con algunas variantes, en el resto del mundo occidental. Es una línea general, es un reflejo.

La ley contra «ciertas formas nuevas de delincuencia», como dice su preámbulo, encontró rápidamente una oposición en la izquierda francesa que, por su situación, se encuentra más amenazada por toda ley que tienda a congelar el orden actual. Pero la

oposición que ha planteado el Senado no es de izquierda. El Senado, por su misma forma de elección —corporativa, indirecta, orgánica—, es de formación conservadora. En el curso del debate, la mayoría de los senadores han acentuado su tendencia al fortalecimiento del orden público, y hasta de la congelación de la situación política actual. Pero han temido, aparentemente, que un día este proyecto de ley pueda volverse contra ellos mismos o contra los intereses que representan, manejado por un Gobierno de coloración distinta. Han temido que se desvirtúen ciertas fórmulas democráticas por las que aún se sienten protegidos. Las modificaciones esenciales que han introducido en el proyecto de ley van en ese sentido. El proyecto sigue manteniendo todo su vigor en la represión de los delitos de desorden público: refuerza a la policía y a la justicia contra la violencia manifiesta. No parece que esta justicia y esta represión sean ahora demasiado blandas: la joven estudiante Frederique Delange acaba de ser condenada a trece meses de prisión por haber robado, con otros estudiantes, unos alimentos de un establecimiento de lujo, alimentos que luego distribuyó gratuitamente en un suburbio hambriento. Se castigan en esa dura sentencia no sólo el asalto a la propiedad privada, sino el hecho social y político: un hambriento que hubiese cometido un delito parecido habría sido condenado a un delito mínimo, pero la estudiante no podía alegar hambre como necesidad perentoria, y su decisión de efectuar un reparto denotaba «premeditación». Pero, rapito, no son estos aspectos de la ley los que han contenido al Senado. Los párrafos que ha borrado del proyecto son aquellos que permiten la persecución y el juicio sumario de aquellos que no han participado en los disturbios, pero que puedan aparecer como responsables de ellos: dirigentes de partidos políticos, organizadores de manifestaciones, políticos, periodistas, intelectuales. Se trataba también de prohibir toda clase de manifestaciones, porque las manifestaciones «pueden terminar mal».

Es preciso recordar que todas estas acciones de la oposición consideradas como irregulares se están manifestando en Francia —y en todos los países— como producto no sólo de la izquierda, sino también de la derecha. Probablemente en el actual gobierno de Francia pesa mucho el recuerdo del gran desorden de mayo de 1968 que pudo acabar con un régimen —y que de hecho acabó con De Gaulle, en cuanto la derecha dejó de considerarle



EN PUNTO

suficiente protección contra un posible asalto de la izquierda—, pero no es posible olvidar el hecho histórico de que la entrada más espectacular del desorden en Francia se produjo desde la derecha y como consecuencia de la guerra de Argelia. Las bombas y los comandos de la Organización del Ejército Secreto crearon en Francia un desorden mucho mayor —y un elevado número de muertos y heridos— que la revolución estudiantil. Pero sin necesidad de recurrir a factores ya históricos, aunque siempre latentes —los «slogans» de «Argelia francesa» se volvieron a escuchar en los contramanifestantes de mayo de 1968—, la misma situación de la Francia actual se manifiesta en una serie de actos de violencia procedentes de elementos conservadores y derechistas: los pequeños comerciantes —de los que Nicoud es el actual héroe visible, como antes lo fue Poujade—, los agricultores, se manifiestan con violencia, ruptura y destrozos. El senador Marcel Martin —alcalde de Nancy— ha señalado que hay violentos «en todas las clases sociales», mientras otros senadores explicaban las razones conservadoras para su oposición al proyecto: «Si se devalúa la noción de manifestación, la acción política quedará en manos de clandestinos», dice uno, mientras otro explica que los organizadores de manifestaciones de buena fe obedecerán la ley, y serán desbordados «por un sindicalismo salvaje, mucho más peligroso». Es curioso que sea un comunista (Gargar, de Guadalupe) quien defiende a las manifestaciones diciendo que son «válvulas de seguridad» y que si se obtienen esas válvulas «se correrá el peligro de hacer saltar el sistema».

Esta necesidad de asegurar el sistema por leyes represivas indiscriminadas parece fruto del neocapitalismo, cuya instauración daña tanto a los conservadores clásicos —pequeños comerciantes, burguesía media, agricultores— como a ciertas formas de progresismo —sindicatos, estudiantes—, de forma que su represión debe hacerse en un sentido doble. Muchos temen que este tipo de implantación se asemeje al fascismo. El profesor Maurice Duverger no cree que haya riesgo de un fascismo abierto en Francia, sino de que se caiga «en una especie de dictadura larvada, de autoritarismo blando, de semitiranía, donde los atentados contra la libertad serían suficientemente restringidos como para parecer soportables y suficientemente fuertes como para destruir lo esencial de la sociedad liberal». Muchos tienen el temor de que esa situación que Duverger describe como posible y futura haya sucedido ya. Pero el temor al futuro es suficiente. Lo ha expresado el propio primer ministro, Chaban-Delmas, al rebatir en la Asamblea Nacional a los que se oponían a este proyecto de ley en una primera lectura y denunciaban el riesgo de fascismo: el peligro, dice Chaban-Delmas, «será imaginario en tanto que un gobierno democrático ejerza el poder». Nadie garantiza, sin embargo, la imposibilidad de acceso al poder de un gobierno no democrático; nadie garantiza que no haya una reconversión del mismo gobierno actual y, en realidad, las agrupaciones de izquierda aseguran que eso ha sucedido ya, y que el texto de proyecto de ley que permite reducir a la impotencia a los movimientos de oposición, «sin los cuales la democracia no puede existir» (Duverger), es ya un abandono claro de las tradiciones democráticas y liberales.

La guerrilla hispanoamericana MUERTE DE YON SOSA

Marco Antonio Yon Sosa era el dirigente de uno de los movimientos guerrilleros mejor implantados en América Latina (ver TRIUNFO, número 411). El sábado 16 de mayo fue muerto en Méjico, cerca de la frontera guatemalteca, por las fuerzas armadas mejicanas. El ministro de Defensa mejicano, general García Barragán, ha dicho que los guerrilleros fueron los primeros en abrir fuego y que si, en lugar de ello, hubieran solicitado asilo político «se podría haber llegado a un acuerdo con ellos». Sin embargo, en los últimos tiempos la actitud de los militares mejicanos ha sido hostil para con los guerrilleros guatemaltecos que cruzaban la frontera. El Gobierno mejicano parece temer que su propia extrema izquierda vaya a organizar guerrillas, hasta ahora desconocidas en el país.

El capitán Yon Sosa —hijo de un comerciante chino— participó, en 1960, en un intento de golpe de Estado contra el Gobierno proamericano de Ydígoras Fuentes; fracasado, pasó a la clandestinidad, y en ella vivió estos últimos diez años. Yon Sosa participó entonces de la ideología trotskista y, más tarde, se

declaró maoísta. Después de un viaje a Cuba, donde se entrevistó con el comandante Ernesto Guevara, en 1962, regresó a su país y organizó el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y aceptó la unidad de acción con los comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Turcios Lima, pero las diferencias graves de concepto les separaron pronto.

Cuando Turcios Lima murió —en 1966, en un accidente de automóvil—, su sucesor, César Montes, entabla ciertas relaciones con Yon Sosa, de forma que podía esperarse una nueva acción común. Fidel Castro, que le había criticado públicamente, cambió más tarde su posición. Yon Sosa pretendía apoyarse principalmente en los indios, víctimas principales de la explotación, y daba a su movimiento un carácter agrario y antiamericano. Intentó acciones de masa —se supone que aconsejado por los chinos—, que fracasaron. Sin embargo, sus guerrillas se mantenían firmemente y no permitían que las destruyera el ejército de diez mil hombres dirigido por especialistas norteamericanos de la antiguerrilla.

Europa socialista EL FUTURO DEL COMECON

Los soviéticos están tratando por todos los medios de convencer a los otros países de la Europa Oriental de la necesidad de estrechar los lazos económicos dentro del marco del Comecon.

Sin embargo, tan sólo los búlgaros parecen estar plenamente de acuerdo con los proyectos de Moscú; ya se ha iniciado la «planificación conjunta» de una serie de industrias búlgaras y soviéticas. Entre los restantes países, los rumanos se oponen, por razones puramente políticas, a una integración en las condiciones fijadas por la Unión Soviética. Los alemanes orientales, por su parte, tampoco parecen ver demasiadas ventajas en dichos

proyectos y prefieren continuar como hasta ahora, aunque sus razones sean más de índole económica que política.

Los polacos, los húngaros y los checoslovacos desconfían igualmente del Comecon. Los polacos, por ejemplo, prefieren especializarse en una más estrecha cooperación con sus vecinos, los alemanes orientales y los checoslovacos. Los húngaros temen que los rusos puedan interferirse a través del Comecon en sus proyectos de reforma económica. Y los húngaros desearían que se modificasen de una vez las anticuadas estructuras de dicha organización supranacional.

América rota ALBAÑILES CONTRA «SABELOTODO»

Los obreros de la construcción son los mejor pagados en los Estados Unidos: su salario actual está establecido en seis dólares/hora, o sea, unas 420 pesetas. Un obrero de la construcción puede llevar a su casa todos los meses cerca de mil

quinientos dólares: unas cien mil pesetas. Aun teniendo en cuenta los altos precios, estas ganancias se pueden considerar como muy importantes. La relación entre esta situación social y las manifestaciones en favor de la política presidencial